

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO X

ACTUACIONES N°: 1836/23



H103104819245

JUICIO: "S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. c/ ESCOBAR, GLADYS MARISA Y OTROS s/ PAGO POR CONSIGNACIÓN" - EXPTE. N° 1836/23.-

San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2023.-

AUTOS Y VISTOS: Vienen a despacho, para dictar sentencia definitiva, en la presente causa caratulada: "S.A. San Miguel A.G.I.C.I. Y F. c/ Escobar Gladys Marisa y otros s/ pago por consignación", que tramitó por ante este Juzgado del Trabajo de la Xa. Nominación.

ANTECEDENTES DEL CASO

Por presentación digital del 10/08/23, se apersonó el letrado Germán Adolfo Andreozzi, como apoderado de S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F, con domicilio real sito en la ruta n° 301, km. n° 33 de la ciudad de Famaillá, conforme poder general para juicios que acompañó con su demanda.

En tal carácter, inició juicio por consignación judicial, a fin de realizar el pago de la indemnización del artículo 248 LCT y de la liquidación final (arts. 103 y 123 LCT) por la suma de \$5.161.559,16, de quien en vida fuera José Alberto Gutiérrez, DNI 17.859.328, CUIL 20-17859328-6, y de los certificados art. 80 de la LCT; a favor de:

1) Gladys Marisa Escobar, DNI 20.759.354, mayor de edad, nacida el 14/04/1969, viuda del trabajador, domiciliada en Ecuador n° 653, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán;

2) Natalia Judith Gutiérrez, DNI 33.139.550, mayor de edad, nacida el 12/07/1987, hija de José Alberto Gutiérrez, domiciliada en Las Heras n° 808, piso 2° B, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán;

3) José Maximiliano Gutierrez, DNI 34.285.100, mayor de edad, nacido el 09/04/1990, hijo de José Alberto Gutiérrez, domiciliado en Ecuador n° 653, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán

4) Luca Gutiérrez, DNI 49.615.232, menor de edad, nacido el 12/05/2009, hijo de José Alberto Gutiérrez, domiciliado en Uruguay n° 4068, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, cuya representación legal le correspondería a la Sra. Cristina Isabel Villalba, DNI 26.799.700, con idéntico domicilio en el carácter de derechohabiente del trabajador fallecido.

Indica que las cuatro personas precedentemente identificadas, se presentaron ante su mandante (en rigor de verdad, Cristina Isabel Villalba lo hizo en representación del menor Luca Gutiérrez), reclamando simultánea y excluyentemente el pago de la liquidación final (arts. 103 y 123 LCT) e indemnización por fallecimiento prevista en el art. 248 de la LCT, por la muerte de José Alberto Gutiérrez, DNI 17.859.328, quien en vida y hasta la fecha de su deceso –producido el 06/04/2023–, era empleado dependiente de S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F.

Destaca que Cristina Isabel Villalba, en representación del menor Luca Gutiérrez (hijo de José Alberto Gutiérrez), desconoció y rechazó el derecho invocado por Natalia Judith Gutierrez y José Maximiliano Gutiérrez (también hijos de José Alberto Gutiérrez pero mayores de edad), su presunto derecho de prelación, y la exclusión de estos dos últimos respecto del cobro de los créditos aquí consignados.

Señala que la situación planteada, no podía ser decidida por su instituyente sin advertir la posibilidad de incurrir en un error, toda vez que, de asistir razón alguno de los aquí citados, podría excluir del derecho invocado por otro/s de los también citados por lo que inicia la presente presente consignación contra las personas mencionadas, como así también contra todos aquellos que por derecho corresponda.

Respecto de los datos del trabajador, denuncia que José Alberto Gutiérrez, ingresó a laborar bajo las órdenes y en relación de dependencia de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. en fecha 16/05/1988, y que al momento de la finalización de su contrato de trabajo, se desempeñaba en la categoría laboral de Oficial de Oficios Generales de Mantenimiento – Personal Temporario correspondiente al CCT N° 244/94 (Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación) en el establecimiento de la mencionada empresa, sito en la ruta n° 301, km. 33, Famaillá, provincia de Tucumán, hasta el día 06/04/2023, en que la relación laboral se extinguió por fallecimiento del trabajador.

Mediante decreto del 26 de octubre del 2023, se imprimió al proceso el trámite sumarísimo, y se convocó a las partes a la audiencia prevista por el art. 106 del CPL, la que se llevó a cabo en fecha 27 de noviembre del 2023.

En dicha oportunidad, comparecieron Sra. Cristina Isabel Villalba, en representación del adolescente Luca Gutiérrez, acompañada del letrado, Dr. Hugo Armando Rosas; la Sra. Gladys Marisa Escobar, junto a su letrada la Dra. Adriana Luisa Lavarra; y en representación de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad de la IVa. Nominación, el Dr. Miguel Alfredo Gallo.

En ese acto contestaron demandada ambas partes. La Sra. Escobar expresó que teniendo claro que la pretensión de la Sra. Villalba solo era en representación de su hijo menor de edad, aceptaba el monto consignado por la empresa en concepto de indemnización y liquidación final.

Por otra parte la Sra Villalba también ratificó la contestación de demanda, solicitando se excluya a los dos hijos mayores de edad del trabajador fallecido, es decir, a la Sra. Natalia Judith Gutierrez y José Maximiliano Gutierrez, y se orden el pago de la suma que le corresponda al adolescente Luca.

AUTOS A DESPACHO PARA RESOLVER: Por providencia dictada en fecha 27 de noviembre del 2023, en la audiencia del art. 106 del CPL, se tiene presente el las manifestaciones formuladas y se ordena pasar la causa a despacho para resolver.

ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.

I.- Conforme surge de la demanda, y su responde realizado en la oportunidad de la audiencia del artículo 106 del CPL de fecha 16/08/2023, constituyen hechos reconocidos y, por ende, exentos de prueba, los siguientes:

1) La existencia de la relación laboral que vinculó al Sr. José Alberto Gutiérrez con la actora SA San Miguel AGICI y F.

2) Las características de la relación laboral: Fecha de ingreso del 16/05/1988, fecha de extinción del contrato de trabajo: 06/04/2023 por fallecimiento del trabajador, categoría: Oficial de Oficios Generales de Mantenimiento, CCT N° 244/94, ultimo domicilio denunciado por el trabajador fallecido: pasaje Ignacio Bass 3670 (barrio Villa Luján –Oeste-), San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán; mejor remuneración mensual del

último año de servicios devengada por el trabajador fallecido: \$ 290.381,91 (diciembre/2022).

3) La aceptación por parte de las demandadas al monto consignado por la empresa acaecido en la audiencia prevista en el artículo 106 del CPL celebrada el 27 de noviembre del 2023.

4) Autenticidad de la prueba documental acompañada por la actora al no haber sido negadas en forma puntal, categórica y expresa por las accionadas en su esponde, pues esa era la oportunidad procesal para ello, atento a lo dispuesto por el art. 88, inc. 1° del CPL.

Atento a ello propongo tener por reconocidos estos hechos; por auténticas y recepcionadas la prueba documental e instrumental y encuadrar la relación en el CCT N° 244/94 que rige la actividad.

II.- En consecuencia, las cuestiones sobre las que me pronunciaré, son:

1) Procedencia de la demanda por consignación de indemnización art. 148 LCT y documentación laboral.,

2) Costas, intereses, y honorarios.

A continuación procedo a analizarlos.

1. PRIMERA CUESTIÓN: Procedencia de la demanda por consignación de indemnización art. 148 LCT y documentación laboral.

1.1. En la demanda presentada el 10/08/2023, la actora consigna la indemnización por fallecimiento (art. 248 de la LCT) ocurrida en fecha 06/04/2023, y de la liquidación final (arts. 103 y 123 de la LCT) por la suma de **\$5.161.559,16**, de quien en vida fuera José Alberto Gutiérrez y de la documentación laboral.

Señaló que se presentaron ante la empresa: 1) Gladys Marisa Escobar (cónyuge); 2) Natalia Judith Gutiérrez (hija); 3) José Maximiliano Gutierrez (hijo); y 4) Luca Gutiérrez (hijo menor), representado por su madre Cristina Isabel Villalba; y que ante la falta de certeza sobre la persona del acreedor, no le quedó alternativa que iniciar la presente acción.

El 03/11/2023, la actora depositó en el Banco Macro SA, Sucursal Tribunales, a la orden de este Juzgado y como pertenecientes a los autos del rubro, la suma de \$5.161.559,16.

Surge de lo ocurrido en la audiencia de fecha 27 de noviembre del 2023, la incomparecencia de los hijos mayores del causante Natalia Judith Gutiérrez y José Alberto Gutiérrez. Por otra parte, también consta la aceptación de la Sra. Gladys Marisa Escobar (cónyuge) y de la madre del adolescente, en su carácter de representante de Luca Gutiérrez, de la suma consignada.

1.2. En primer término, y atento a lo acontecido, esto es, la incomparecencia a la audiencia de los hijos mayores del causante, Natalia Judith Gutiérrez y José Maximiliano Gutierrez, sin justificación valedera, se hace pasible el apercibimiento dispuesto en el artículo 106 del CPL, por lo que, se tendrá por incontestada la demanda, y además, se tendrá presente el apercibimiento contenido en la norma, que dispone que si no concurre el demandado, se hará lugar a lo solicitado si la petición es arreglada a derecho.

Así lo declaro.-

1.3. En segundo lugar, corresponde determinar los derechos habientes legitimados con derecho al cobro de lo consignado.

Ingresando al análisis de las constancias de autos, considero acreditados -a partir de la prueba instrumental (partidas de nacimiento, acta de matrimonio),

los siguientes hechos: **A)** que el Sr. José Alberto Gutiérrez, quien fuera empleado de SA San Miguel AGICI y F y, falleciera el 06/04/2023, que fue cónyuge de Gladys Marisa Escobar, con quien tuvo dos hijos hoy mayores de edad, lo cual surge del reconocimiento que efectuaron todas las partes involucradas, en los escritos de demanda y el responde, **B)** que Luca Gutiérrez, es un hijo, menor de edad, que el trabajador tuvo con la Sra. Cristina Isabel Villalba, lo que surge de las pruebas documentales adjuntadas por la parte actora y que no fueron desconocidas por ninguna de las partes actuantes y, por lo tanto, se tienen por reconocidas y auténticas.

En cuanto al plexo normativo aplicable, art. 248 de la LCT prescribe que: *“en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto-ley 18.037/69 (t.o. 1974) tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley.*

A los efectos indicados, queda equiparada la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años anteriores al fallecimiento.

Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.

Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causa-habientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.”

El mentado artículo, ha generado variadas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales. En primer término, alude al relativo al régimen previsional al que remite la propia norma, en tanto refiere a una ley (art. 38 de la ley 18.037 t.o. 1974) que hace tiempo ya fue derogada. En dicho orden de ideas, según cómo se interprete la remisión, será diferente el menú de derechohabientes en ella contenido.

Al respecto, es doctrina legal de la CSJT que:

“La remisión contemplada por el art. 248 de la LCT al art. 38 del Decreto Ley 18.037, tras la derogación de dicha norma (art. 168, Ley 24.241) debe entenderse efectuada al artículo 53 de la Ley 24.241”. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo- MORENO VDA. DE YAPUR MARIA TERESA Vs. CAJA DE SEGUROS S.A. S/ COBRO DE PESOS, sentencia del 02/08/2017).

Adhiero a tal interpretación.

A su vez, la Ley n° 24.241, al determinar quiénes son los derechohabientes que tiene derecho a la pensión por fallecimiento del jubilado o del afiliado en actividad, incluye en concurrencia a la cónyuge y a los hijos menores de 18 años de edad.

Siguiendo esa misma línea de razonamiento, la Jurisprudencia que comparto, tiene dicho que:

“Respecto de los hijos del causante –Ayelén y Jonatan Ferrari-, tiene razón la demandada, ya que al momento del fallecimiento del señor Raúl Carlos Ferrari –5 /12/14-, ambos eran mayores de 18 años –nacidos el 4/3/89 y 25/3/82, respectivamente-, por lo que dicha circunstancia los priva de ser considerados beneficiarios, conforme lo previsto en el artículo 53 de la ley 24.241)” (CNAT, Sala VIII, Expte. N° CNT 70052/2016,

sentencia definitiva de fecha 08/11/2022, en autos “FERRARI AYELEN MARIELA Y OTROS C/ APLICACION TECNOLOGICA S.A. S/ DESPIDO”).

De acuerdo a lo expuesto y antes de finalizar, diré brevemente que, con relación a los “hijos” del causante, sobre los que declararé la incontestación de la demanda, surge que ambos son mayores de edad, y no han acreditado recibir beneficios económicos de parte del trabajador; razón por la cual, considero que no concurren como legitimados, en el caso que nos ocupa.

Así lo declaro.-

Por lo que, los únicos acreedores de los montos aquí consignados son la cónyuge viuda (Gladys Marisa Escobar) y el hijo menor del trabajador fallecido (Luca Gutiérrez), con exclusión de los hijos mayores de edad del empleado difunto (Natalia Judith Gutiérrez y José Maximiliano Gutiérrez), puede citarse la siguiente jurisprudencia.

Así lo declaro.-

1.4 Procedencia del pago por consignación.

La actora SA San Miguel AGICI y F, manifiesta que inicia la demanda de pago por consignación, ante la situación de incertidumbre, respecto al orden de prelación para abonar la indemnización por fallecimiento de quien fuera trabajador en la empresa, Sr. José Alberto Gutiérrez.

El pago por consignación, es el mecanismo establecido por la ley por medio del cual, el deudor podrá hacer efectivo su derecho a liberarse de la obligación, cuando no puede ser efectuado a quien posee legitimación pasiva del pago (acreedor, representante, tercero indicado), en razón de alguna de las causas previstas en la ley.

Los casos previstos para la procedencia de la consignación son:

a) Si el acreedor fue constituido en mora, b) cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, y c) cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable.

Por otro lado, “con ajuste a lo dispuesto en el art. 758 CCYC, la consignación para ser válida, debe ser efectuada respetando los principios que gobiernan el pago. Pues bien, en lo que atañe al objeto de la prestación que el demandante debe consignar, se enfatiza que ese objeto debe ser idéntico al prometido e íntegro, es decir, completo. En suma, para que una consignación sea plenamente eficaz, debe verificarse respetando los principios de identidad e integridad, pues con ellos se resguarda la exactitud del objeto” (Ernesto C. WAYAR, El pago por consignación y la mora del acreedor, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 179).”(CSJT Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán vs. Colegio Médico de Tucumán S/ Pago por consignación, Sentencia del 12/04/2016).

Antes de decidir sobre el tema, también me parece importante mencionar que la aprobación y procedencia de una “consignación judicial” de un crédito laboral, constituye una cuestión de derecho (y no simplemente de hecho); razón por la cual el juez debe aplicar el derecho, con prescindencia y aun en contra de la opinión de las partes (art. 128 del CPCC supletorio).

Continuando con el examen de la procedencia y aprobación de la consignación, debo expresar que si bien puedo advertir que en el caso de autos, no ha existido “oposición” de las partes demandadas, atento a la aceptación de la pretensión de la actora, no es menos cierto, que es deber de este Magistrado (como se explicitó en el párrafo anterior), verificar que el “pago” consignado, reunía los requisitos de “oportunidad”, “identidad”, e “integridad”, para poder desobligar al deudor.

En primer lugar, en lo referido a la **oportunidad**, si bien es cierto que

el deudor de la obligación cayó en mora de pleno derecho el día 13/04/2023 (falleció el Sr. Gutierrez el 06/04/2023, y la mora operó luego de transcurrido el cuarto día hábil); no es menos cierto que -como se examinó ut supra- el deudor tenía una duda más que razonable respecto de quién, o quiénes, eran los acreedores (derechohabientes legitimados), y por lo tanto, pese a esa mora automática, era razonable que aguardara hasta que se definiera dicha situación; y frente a la imposibilidad de hacerlo, procediera a “consignar los montos”.

Por lo que considero que no existen objeciones (desde el punto de vista de la oportunidad), para que el deudor procediera -como lo hizo- a consignar los montos que consideraba adeudados, ya que no estaba definida la legitimación de los derechohabientes, para recibir el pago.

En efecto, existía una duda cierta y razonable con respecto a quien era el acreedor legitimado para cobrar la indemnización por el fallecimiento del Sr. Gutierrez, prevista en el art. 248 del LCT. Esto surge de la circunstancia que dicho pago era reclamado tanto por la cónyuge, los hijos mayores y la madre del adolescente hijo del causante.

En consecuencia, a fin de no incurrir en error, el actor procedió a consignar dicho pago judicialmente y notificó dicho depósito a los posibles acreedores del mismo.

Así lo declaro.-

En relación a la **identidad**, entendiendo por tal que el deudor debe dar aquello mismo a lo cual se obligó, y por lo cual el acreedor no está obligado a recibir, y el deudor carece de derecho a cumplir, con una prestación distinta a la debida, me parece que el ofrecimiento dinerario es correcto, porque las obligaciones indemnizatorias deben ser canceladas mediante la entrega de sumas de dinero (confr. art. 124, 149 y cctes. de la LCT).

Finalmente, debe examinarse si el pago ofrecido (el importe depositado y dado en pago por la consignación), cumple con el requisito de “**integridad**” que debe reunir todo pago de un crédito laboral, sabiendo que en esta materia rige el principio de irrenunciabilidad (de orden público), como también está previsto y opera de “pleno derecho” que todo pago que no sea “íntegro” (más allá de la existencia de oposición, o no, debe ser considerado “pago insuficiente” (art. 260 de la LCT), y por lo tanto, debe ser tomado como un “pago a cuenta”, aun cuando no se haya hecho reserva alguna; es decir, aun cuando no haya existido impugnación, oposición o reserva alguna.

Y para decidir si el pago es “íntegro”, nuevamente se debe examinar la existencia de “mora”, y verificar si al momento de cumplir con el depósito, se dio en pago la integridad del crédito correspondiente.

Al respecto, desde ya adelante que el pago ofrecido no reúne el requisito de “integridad”, y por lo tanto, no puede ser aceptado.

En efecto, en primer lugar, debe tenerse presente que la mora operó de pleno derecho el 13/04/2023, ya que el fallecimiento fue el 06/04/2023, generándose ese día y de pleno derecho, la extinción del contrato, y el nacimiento del crédito indemnizatorio y de la liquidación final, en cabeza de los legitimados o derechohabientes.

Por lo tanto, si computamos el plazo para pagar (de 4 días - confr. art. 149 de la LCT), el día 13/04/2023, la actora incurrió en mora de pleno derecho.

Al respecto, aclaro que el hecho que no haya tenido certeza de quién era el acreedor, no la releva de la mora (que opera ipso iure), ni tampoco del deber de abonar el crédito íntegro.

Dicho de otro modo, aun cuando no haya tenido certeza de quién era el legitimado para recibir, eso no significa que se hayan “suspendido el curso de los intereses”, sino que -por el contrario- esos intereses continuaban corriendo, y cuando ese acreedor

tuviere la certeza de quién era el “acreedor”, tenía la obligación de realizar el “pago íntegro”, el cual no puede ser otro, que el capital (indemnizaciones y liquidación final), con más los intereses, desde la fecha de la mora y hasta el día del efectivo pago.

Así las cosas, si el deudor -frente a la duda de quién era el derechohabiente legitimado- quiere liberarse mediante la “consignación” del crédito, tenía la obligación de cumplir con un “pago íntegro”; es decir, debía depositar la totalidad (capital e intereses), calculados a la fecha del depósito judicial.

Y, en el caso que nos ocupa, ello no fue cumplido, como se verá seguidamente.

1.5. PLANILLA DE RUBROS:

Ingreso: 16/05/1988		
Egreso: 06/04/2023		
Antigüedad: 29 años y 3 meses (trabajador temporario)		
Categoría: Oficial de Oficios grales. de Mantenimiento – Temporario del CCT N° 244/94		
MRMNH (Diciembre 2022) \$ 290.381,91		
<u>Indemnización art. 248 LCT</u>		\$ 5.130.478,16
<u>SAC Proporcional 1° Semestre 2023</u>		\$ 34.553,37
<u>SAC s/ NR</u>		\$ 2.401,70
Total Indemnizaciones al 06/04/2023		\$ 5.167.433,23
Interés tasa activa BNA desde 13/04/2023 al 02/11/2023	63,92%	\$ 3.303.023,32
Total \$ rubros 1) al 8) al 30/11/2023		\$ 8.470.456,55

De la planilla calculada, desde la fecha de la mora (06/04/2023) hasta la fecha del depósito (02/11/2023), surge que la parte actora, para realizar el “pago íntegro de la indemnización art. 248 de la LCT, más importe de la Liquidación (SAC 1er. semestre 2023) más los intereses, debía depositar el importe total de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$8.470.456,55), conforme la planilla precedentemente realizada.

Sin embargo, y conforme surge de la boleta de depósito adjunta en la presentación de fecha 03/11/2023, se depositó la suma de pesos CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 5.161.559,16), lo que implica que existía una diferencia (en menos) de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$3.308.897,39); por lo tanto, queda claro que el importe depositado no cumplía con el recaudo de integridad, que se le debe exigir a todo pago, más aún cuando es de naturaleza laboral, y por ello, ese importe debe ser considerado como un pago a cuenta (art. 12, 260 y cctes. de la LCT).

En consecuencia, cabe entender que no existió pago íntegro del crédito (al realizar la consignación- confr. arts. 12, 128, 137, 149, 255 bis, 260 y cctes. de la LCT; y arts. 867, 869, 870 y Cctes. del C.C. y C. de la Nación); y por tanto, corresponde rechazar la consignación ofrecida (como pago cancelatorio), y tomando el importe depositado (incluyendo los intereses devengados por el depósito a plazo fijo existente), como “pago a cuenta” de la planilla total que habrá de calcularse en la presente sentencia.

Así lo declaro.-

Para finalizar, y evitar discusiones sobre el importe que se debe dar en pago, debo puntualizar que el importe dinerario que corresponde y se calculó en la planilla que forma parte de la presente sentencia), debe ser entregado a la la viuda (Gladys Marisa Escobar) y al hijo menor del trabajador fallecido (Luca Gutiérrez), como pago a cuenta (art. 260 de la LCT); de los rubros que le correspondían a dicha demandada, como consecuencia del fallecimiento del Sr. Gutiérrez, y concurriendo -en partes iguales. Es decir, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.580.779,58)** 50% de los fondos depositados el 02/11/2023; para cada uno de ellos.

En concordancia con el porcentaje asignado a los legitimados al cobro de indemnización del causante, la Sala II de la CNAT dispuso que:

"... Por lo tanto, les asiste razón a los hijos habidos entre el causante y su cónyuge supérstite, en cuanto a que también tienen derecho a percibir la parte de la indemnización del art. 248 LCT pertinente, por lo que el porcentaje de la indemnización (50%) que la Sra. Juez a quo reconoció en favor de los hijos del causante con su concubina debe ser distribuido entre la totalidad de los hijos del causante " (CNAT Sala II Expte N° 1807/06 Sent. Def. N° 101.500 del 28/02/2013 "Lisandro de la Torre SA c/Franco, Yolanda Noemí y otro s/consignación).

Por lo tanto, conforme jurisprudencia citada considero que corresponde el 50% de la indemnización a la Sra. Gladys Marisa Escobar, en el carácter de cónyuge, y el otro 50% restante, en partes iguales, al hijo menor del trabajador fallecido Luca Gutiérrez.

Así lo declaro.-

1.6. Conforme constancias del presente expediente, **no existe a la fecha proceso sucesorio abierto**, por lo que la suma que de debe ser adjudicada al adolescente Luca Gutiérrez, se acreditará una vez presentado un plan de gastos e inversión, previa vista al Sr. Defensor, conforme lo informado por éste último en oportunidad de celebra la audiencia del art.106 de la CPL.

1.7. DOCUMENTACIÓN LABORAL: Respecto a la consignación de los certificados de servicios y remuneraciones y del trabajo art. 80 LCT, considero rechazarla, atento a que las constancias digitales se desprende que en ellas, no se encuentra la firma de la parte actora certificada por autoridad competente.

SEGUNDA CUESTIÓN:

2.1. Intereses.

Con respecto a la tasa de intereses aplicable esta es la **tasa activa del Banco de la Nación Argentina**, según doctrina legal de nuestra CSJT en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 "Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones" donde se ratifica la decisión del Alto Tribunal de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, n° 324 del 15/04/2015, entre otras) y en consideración que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, se aplicará la tasa activa. *"En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por la trabajadora y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la*

fecha de la mora y hasta su efectivo pago". (Dres. GANDUR -dis. parcial- GOANE -dis. parcial- SBDAR -POSSE- PEDERNERA).

Así lo declaro.-

2.2. Costas.

a) El art. 60 del CPCC, de aplicación supletoria al fuero, por imperio del art. 49 del CPL, en su primera parte, establece como principio general, que toda sentencia, definitiva o interlocutoria, que decida un artículo contendrá decisión sobre el pago de las costas. En consonancia con lo allí establecido, corresponde expedirme sobre el pago de las costas, ya que el pedido efectuado por la actora, se resuelve por la presente sentencia, en la que se decide un artículo.

b) Entrando ahora sí a analizar a quien corresponde el pago de las costas, se debe determinar la responsabilidad de las partes en las actuaciones. El art. 105 del C.P.C.C. consagra el principio objetivo de la derrota, estableciendo que la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas, aunque no mediara petición expresa.

Atento el resultado arribado, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (art. 105 y ccdtes. del C.P.C.C.), las costas será impuestas en su totalidad a la parte actora vencida.

Así lo declaro.-

2.3. Honorarios.

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. "2" de la Ley n° 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis, y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50, inciso 2) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el 40% del capital de demanda actualizado, el que resulta al desde el 10/08/2023 al 30/11/2023, en la suma de \$ 3.667.847,98 (50% de \$ 7.335.695,96).

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley n° 5480 con los topes y demás pautas impuestas por la Ley n° 24.432 ratificada por la ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado **GERMÁN ADOLFO ANDREOZZI**, por su actuación en el doble carácter como apoderado de la actora, en una etapa del proceso sumarísimo, el 12% con más el 55% de la base regulatoria, equivalente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$341.109,86) (base x12% /2x1 más el 55% por el doble caracter).

Así lo declaro.-

2) A la letrada **ADRIANA LUISA LAVARRA**, por su actuación en el doble carácter como apoderada de la demandada Gladys Marisa Escobar, en una etapa del proceso sumarísimo, el 15% con más el 55% de la base regulatoria, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$426.387,33), conforme art. 38 de la Ley n° 5480.

Así lo declaro.-

3) Al letrado **HUGO ARMANDO ROSAS** por su actuación en el doble carácter como apoderado de la demandada CRISTINA ISABEL VILLALBA, quien

compareció en representación del adolescente LUCA GUTIÉRREZ, en una etapa del proceso sumarísimo, el 15% con más el 55% de la base regulatoria, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 426.387,33), conforme art. 38 de la Ley n° 5480.

Las sumas dinerarias reguladas en concepto de honorarios profesionales deberán ser abonadas por quienes resulten responsable de su pago, en el plazo de CINCO (5) DÍAS de quedar firme la presente, de conformidad a lo estipulado por los arts. 601, ssgtes. y cctes. del CPCC.

Así lo declaro.-

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I) RECHAZAR LA DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACIÓN promovida por **S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F.**, con domicilio real sito en la ruta n° 301, km. n° 33 de la ciudad de Famaillá, conforme a lo considerado.

II) ORDENAR el pago a la **SRA. GLADYS MARISA ESCOBAR**, DNI N° 20.759.354, mayor de edad, nacida el 14/04/1969, viuda del trabajador, domiciliada en la calle Ecuador n° 653, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, de la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.580.779,58)**, 50% de los fondos depositados el 02/11/2023; debiéndose entregársele a cuenta y como pago parcial (art.12, 260 y cctes. de la LCT), el importe que se encuentra depositado en el plazo fijo, a la orden del Juzgado, y como pertenecientes a los autos del rubro, conforme certificado de plazo fijo de fecha 07/12/2023. En consecuencia, una vez firme la presente, se deberá librar oficio al BANCO MACRO SA, Sucursal Tribunales, para que deje sin efecto el certificado de plazo fijo oportunamente constituido, y ponga a disposición del Juzgado la suma resultante del mismo, para que se haga entrega a la Sra. SRA GLADYS MARISA ESCOBAR, conforme a lo considerado.

III) ORDENAR el pago a Luca Gutiérrez, DNI N° 49.615.232, menor de edad, nacido el 12/05/2009, hijo de José Alberto Gutiérrez, domiciliado en Uruguay n° 4068, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, cuya representación legal le correspondería a la Sra. Cristina Isabel Villalba, DNI 26.799.700, de la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.580.779,58)**, 50% de los fondos depositados el 02/11/2023; **PREVIA** presentación y aprobación de un plan de inversión y destino del dinero.

IV) IMPONER LAS COSTAS: en su totalidad a la parte actora vencida conforme, a lo tratado.

V) REGULAR HONORARIOS PROFESIONALES:

1) Al letrado **GERMÁN ADOLFO ANDREOZZI**, en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$341.109,86).

2) A la letrada **ADRIANA LUISA LAVAR**, en la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 426.387,33).

3) Al letrado **HUGO ARMANDO ROSA**, en la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 426.387,33).

4) Las sumas dinerarias reguladas en concepto de honorarios profesionales deberán ser abonadas por quienes resulten responsable de su pago, en el plazo de CINCO (5) DÍAS de quedar firme la presente, de conformidad a lo estipulado por los arts. 601, ssgtes. y cctes. del CPCC.

VI) PRACTICAR OPORTUNAMENTE PLANILLA FISCAL (artículo 13 de la Ley n° 6204).

VII) COMUNICAR a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

PROTOCOLIZAR, HACER SABER, CUMPLIR.- LHC - 1836/23.-

NRO.SENT: 849 - FECHA SENT: 19/12/2023

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=EXLER Cesar Gabriel, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20264464561, Fecha:19/12/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>